Ramírez, Bravo, Roberto, “Ayudó a despojar a campesinos para dar tierras a Tres Vidas”, *La Jornada Guerrero*, Guerrero, 24 de septiembre, 2007.

Dirección electrónica:

<http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2007/09/24/index.php?section=acapulco&article=009n2aca>

El notario público Eduardo Arturo Nozari Morlet fue acusado penalmente por las autoridades ejidales de Plan de los Amates de haber dado fe de la participación de personas fallecidas, en una asamblea en la que se aprobó la venta desventajosa para los campesinos, de 52 hectáreas.

Hoy lunes el fedatario tendría la última oportunidad, de acuerdo con el proceso, de presentar sus alegatos, dado que se ha negado a asistir a dos citaciones anteriores.

“Debido a este convenio que se llevó a cabo, el notario público da fe que asisten ciertas personas que ya ni viven, Yolanda Aguilar Díaz y Antonio Campos Galeana, para que tomaran decisiones dentro de la mesa, siendo que ya fallecieron, uno hace cinco años, y otro hace ocho, y por tanto da fe de hechos que no existen. En base de eso se le está fincando responsabilidad de falsificación”, expresó el abogado Bejamín Téllez Reyes.

Independientemente de ello, los ejidatarios interpusieron demanda también contra los integrantes de la anterior mesa directiva, compuesta por Martín Campos Aparicio, Daniel Colón García, Noel Galeana Campos y Alvaro Campos González, por fraude, abuso de confianza, administración fraudulenta y lo que resulte, porque al entregar a la siguiente mesa directiva las cuentas no fueron claras.

El conflicto data desde la expropiación de las tierras del consorcio Tres Vidas en la Playa durante el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu. Según los ejidatarios, el gobierno expropió 174 hectáreas pero luego las vendió –ahora en extensión de 332– a cinco empresas, con lo que invadió el área del ejido. A raíz de ello, el gobierno permutó a los campesinos 310 en San Marcos y el resto las pagó a 500 mil pesos para cada uno de los ejidatarios afectados.

Aunque algunos, 36 en total, se opusieron y se negaron a recibir el pago, fueron presionados y se les acusó de despojo y se les giraron órdenes de aprehensión, por ello

actualmente sólo cuatro mantienen su negativa a aceptar la venta de sus tierras por esa cantidad.

A raíz de la asamblea del 17 de febrero de 2005, según relataron los campesinos Joaquín Campos Rivera, Rodimiro Delgado Campos, Eleazar Baños Orbe y Alejandro Latabán Campos, integrantes de la nueva mesa directiva, así como Ana Luisa Campos, afectada, la anterior mesa recibió 72 millones 220 mil pesos de las empresas para pagar a los ejidatarios, 7 millones 780 mil del gobierno estatal, y 2 millones 875 mil pesos del municipio, con un total de 82 millones 875 mil.

El notario público no sólo dio fe de la votación de personas muertas, sino que permitió que las firmas de los ejidatarios para aprobar la asamblea se recabaran casa por casa de manera individual, cuando, según ordena la ley, éstas deben estamparse durante la asamblea. Si ello no bastara, era el notario quien tenía en su custodia el dinero y era quien pagaba a cada uno de los afectados y a dos años de distancia, quienes no han cobrado su importe no tienen derecho a ni un solo peso por concepto de interés.

En 2003, los ejidatarios habían ocupado los terrenos que las empresas les habían invadido, pero en 2005, aunque mantenían la ocupación y habían construido dos restaurantes, el notario Nozari Morlet dio fe de que las tierras se habían entregado desocupadas y sin ninguna construcción encima, lo cual era una falsedad, explicó Campos Aparicio. Toda esta fe sobre actos falsos se incorporó en la demanda penal que esta semana podría ser consignada ante un juez, expresaron los ejidatarios.